

SEMINARIO DE HISTORIA

Dpto. de Historia Social y del Pensamiento Político, UNED
Dpto. de Historia del Pensamiento y de los Movs. Sociales y Políticos, UCM
Fundación José Ortega y Gasset

Curso 2007-2008

Documento de trabajo 2008/5

ESQUERRA REPUBLICANA DURANTE LA GUERRA CIVIL

José Luis Martín Ramos
Catedrático de Universidad
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, UAB

SESIÓN: JUEVES, 26 DE JUNIO DE 2008, 19 H.

Lugar: Anexo de la biblioteca
Fundación José Ortega y Gasset
c/ Fortuny 53, 28010 Madrid

Contacto: seminariodehistoria@gmail.com

ESQUERRA REPUBLICANA DURANTE LA GUERRA CIVIL

José Luis Martín Ramos

1. La sublevación de julio 36 no cogió desprevenida a Esquerra Republicana de Catalunya; las memorias de Escofet y Guarnier explicaron de manera suficiente cómo el Gobierno de la Generalitat estaba al tanto de la conspiración militar y cómo planearon hacerle frente, con las fuerzas de orden público de que disponían y con el concurso del Gobierno de la República, al que informaron de lo que conocían sobre la conspiración. Otra cosa es cuáles eran los planes políticos de Esquerra, qué lectura particular hacía del Front d'Esquerres – variante semántica significativa del Frente Popular – y si era cierto – como ha sostenido recientemente Josep Benet – que contemplaba la opción de un acercamiento a la Lliga Regionalista para reorientar su política de alianzas hacia un bloque nacionalista, más que social; esta última opción que sin duda algunos políticos republicanos – no sólo de Esquerra, sino de Acció Catalana Republicana, piénsese por ejemplo en Claudi Ametlla – podían considerar, bien puede haber sido magnificada por los recuerdos juveniles de Josep Benet, demócrata cristiano en la línea de Maurici Serrahima que habría pretendido en 1936, antes de que se produjera la sublevación y la guerra, que Unió Democràtica hiciera de puente entre Esquerra y la Lliga. Borja de Riquer, especialista reconocido en la historia de la Lliga, descarta la afirmación de Benet de un supuesto acercamiento entre Lliga y ERC. Sí es cierto que, en la primavera de 1936, a pesar de la tan cacareada imagen del “oasis catalán” (una imagen que debe limitarse a la ausencia de enfrentamientos partidarios a tiros, en las calles), el Gobierno de la Generalitat, monocolor de Esquerra después de la salida de él de la representación de la Unió Socialista de Catalunya – Joan Comorera - , tenía que hacer frente a una reactivación de la movilización de la CNT, con duras huelgas en el sector del transporte, uno de los síntomas de la recuperación de la central anarcosindicalista después de la depresión que había padecido a consecuencia del fracaso de su último intento insurreccional de diciembre de 1933. Esa coyuntura social presentaba, por otra parte, la novedad añadida de la creciente competitividad de la UGT en Cataluña, lo que radicalizaba aún más los conflictos.

Sean cuales fueren las previsiones frente a la conspiración o los planes políticos que se consideraran en la primavera de 1936, el desenlace final de la sublevación, con su derrota en

Cataluña acompañada con la ocupación de las calles por los obreros armados – mayoritariamente de la CNT por el doble hecho de que en esos momentos era, todavía, la central sindical mayoritaria y la única que tenía un pasado reciente armado y una vocación insurreccional clara – descolocó al Gobierno de la Generalitat, a Esquerra y a una parte de su base social, que compartía territorio y espacios de sociabilidad con el catalanismo conservador, situado por los hechos de julio en el bando de los enemigos. La sublevación había sido derrotada, pero la sublevación había generado un grave problema de control social y un nuevo panorama político.

Companys y la constelación dirigente de Esquerra que se mantuvo en su sitio – no todos desaparecieron o se escondieron, aunque si algunos de ellos se eclipsaron, posiblemente por que no sabían exactamente qué hacer - rechazaron la opción de recuperar el control social por la vía de un cambio político concretado en la formación de un gobierno de Frente Popular, como le propuso Joan Comorera, porque no creyeron que en esos momentos esa fórmula tuviera suficiente fuerza para tal objetivo. Optaron por una de las soluciones tradicionales del republicanismo catalanista, la del pacto con el anarcosindicalismo, dejando en sus manos el campo de la movilización social a cambio de que la CNT aceptara el mantenimiento de la estructura institucional, la supervivencia del control de la cual pasó a ser la baza principal de Esquerra Republicana. Ese era el sentido de la famosa entrevista de Companys con los líderes anarcosindicalistas. La contrapartida fue la decisión de la CNT de no ir más allá de su informal toma de las calles y aceptar el reparto de funciones que le ofreció Companys en la nueva situación política, con la constitución del Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña.

A favor del pacto jugaron las limitaciones de unos y otros. El Gobierno de la Generalitat no podría haber recuperado fácilmente por sí solo el control de las calles, disponiendo únicamente, y no de manera muy segura, de las fuerzas de orden público, es decir de la Guardia de Asalto ya que sobre la Guardia Civil se mantenían muchas sospechas – no sobre sus mandos superiores, pero sí sobre los intermedios y los números – y ya no se podía recurrir al elemento que siempre, en última instancia, había resuelto los conflictos más graves de orden público, el ejército. A su vez, los líderes anarcosindicalistas, mayoritariamente – con la excepción de García Oliver – apreciaron con lucidez que no tenían garantizado el salto de pasar de ocupar las calles y las fábricas a hacerse con el control total de la situación y proclamar el “comunismo libertario” y de modo que prefirieron un acuerdo que, aparentemente, suponía el mayor reconocimiento institucional hasta entonces conseguido y un extraordinario avance en el monopolio del control

del mundo de la producción y del trabajo. Por otra parte, además de sus limitaciones, cada uno tenía bazas propias que ofrecer: por ejemplo, los anarcosindicalistas la movilización inmediata para la guerra y el Gobierno de la Generalidad el control del sistema bancario, con el concurso de la UGT que dominaba ese sector, lo que le permitió tras la confusión de los primeros días garantizar el pago de nóminas y los flujos financieros mínimos sin los cuales tampoco habrían podido salir adelante las empresas ocupadas por los sindicatos. Para esa política de acuerdo entre dos partes que, no obstante ello, mantenían sus mutuas desconfianzas, Companys contó con la colaboración, imprevisible hasta entonces, del pródigo Tarradellas que encontró en aquella coyuntura su primera resurrección política¹.

El Gobierno de la Generalidad quedó tocado, pero de ninguna manera hundido. Esquerra Republicana, que en aquellos mismos días de julio hubo de suspender su propio congreso que se anunciaba “movido” por las disidencias internas, algo habitual en una fuerza política que ya entonces actuaba más como un movimiento que como un partido, quedó afectada, en parte desorientada y disminuida, pero no desaparecida. Su control del territorio se debilitó por la asunción del poder local por los comités, en perjuicio de los ayuntamientos, pero, en cualquier caso habría que repasar comité por comité y no olvidar la presencia en ellos también de elementos republicanos. Una muestra significativa, y políticamente trascendente, fue lo que ocurrió con las patrullas de control en la ciudad de Barcelona. Las constituidas “espontáneamente” en los primeros días de la guerra ya incluyeron elementos republicanos – de Esquerra, del Partido Federal,...- en cada barrio, de acuerdo con el peso que en ellos tuvieran. Los “casals” y centros republicanos que constituían la base militante de Esquerra no dejaron de funcionar y algunos de ellos también se distinguieron en la inmediata represión “de retaguardia” que la literatura más tópica achaca con exclusividad a los de la FAI y, a distancia de ellos, a los comunistas. Joan Pons, elemento clave de Esquerra Republicana en ese campo en los primeros meses de la guerra ha dado una relación clara de ello, aunque de manera interesada cargando las tintas de la culpa en otro y exonerándose al máximo a él mismo². Cuando las Patrullas de Control de Barcelona se organizaron de manera formal, por acuerdos de los diversos partidos y sindicatos, se estableció un contingente más o menos fijo de patrulleros, repartidos según cuotas de representación, correspondiendo a los republicanos – muy mayoritariamente Esquerra – la segunda en importancia después de la atribuida a la CNT-FAI³. No obstante es justo añadir que los republicanos no solo intervinieron en la represión, también lo hicieron limitando sus efectos,

procurando salvar no pocas personas, sobre todo desde la consejería de Gobernación, a cargo de Jose Maria España y sus colaboradores.

No hubo desaparición republicana, ni en la estructura política institucional ni en la base. Aunque si se produjeron abandonos y fugas. Algunos muy tempranas y algo sonados por los nombres, como la marcha a Francia de Lluhí y Vallescá , Puig i Ferrer, pero políticamente no tuvieron alguna importancia hasta la marcha de Ventura Gassol y de Joan Casanovas, presidente del Parlament. La “desaparición” de Esquerra ha sido una apreciación habitual en la historiografía, pero es mi convicción que ha de rectificarse de manera absoluta; incluso cuando pueda matizarse, como lo hizo Enric Ucelay Da Cal (1982) considerando que Esquerra Republicana no existía “al margen” de lo que el autor denominaba “instituciones populistas” – las instituciones del gobierno de la Generalitat - . Desde luego Esquerra sobrevivió, y no es poco, en esas instituciones a la convulsión de julio de 1936, pero también sobrevivió como lo que siempre fue, un movedizo conglomerado republicano y nacionalista con un amplio apoyo social, interclasista. Perdió algunos prohombres políticos de su superestructura, pero fueron muchos los que se mantuvieron, mientras otros, como Tarradellas, se reincorporaron a ERC a partir de julio de 1936. También se vio afectada temporalmente su estructura administrativa-organizativa, pero a la vuelta del verano esa situación estaba ya remontándose, de manera que la formación del gobierno Tarradellas consolidó el camino de recuperación organizativa y territorial.

Sí hubo desacuerdo interno y con ello vacilación y debilidad política, fomentada por la prolongación de la guerra y de la violencia. Desacuerdo sobre cuál era la mejor opción para recuperar el control de la situación, parcialmente perdido, sobre todo en áreas tan sensibles como el orden interno y la guerra. En tanto que Joan Casanovas propugnó hacerlo acabando con el poder de los anarcosindicalistas en esas áreas y reforzando políticamente el gobierno de la Generalitat con una alianza de “frente popular” con los socialistas unificados – Comorera y Casanovas compartían desde siempre la aversión hacia el anarquismo -, Tarradellas, en el otro extremo del abanico republicano, recuperó su peso político específico precisamente a través de la alianza con los anarcosindicalistas, una alianza establecida por él en el seno del Comité de Milicias Antifranquistas. Por su parte, Companys mantuvo la posición “tradicional” de entenderse con los anarcosindicalistas, con la esperanza de, con el tiempo, imponerles de hecho su dirección política. La propuesta de Casanovas empezó a ser derrotada con el fracaso de su

primer gobierno, a finales de julio y primeros días de agosto, caído precisamente a manos de una maniobra de Tarradellas y el faísta García Oliver, los dos pesos fuertes del Comité de Milicias. Lluís Companys no quiso arriesgar entonces una ruptura con los anarcosindicalistas, de modo que el PSUC, un recién nacido, tuvo que conformarse por el momento, para pasar a crecer de inmediato sobre la base de presentarse como la única opción frentepopulista coherente; y aquí señalo también otra discrepancia con Da Cal, que califica la opción del PSUC como “neopopulista”, en línea de continuidad, a manera de sucesión, con el populismo de Esquerra, y comparto, por el contrario, la posición de Ferrán Gallego (2007) sobre la interpretación del frentepopulismo en general y sobre el frentepopulismo del PSUC en particular. Desde el verano del 1936 los proyectos que se enfrentaron en Cataluña fueron el populismo de Esquerra, debilitado pero no desaparecido, el corporativismo revolucionario anarcosindicalista y el frentepopulismo del PSUC; esa es la confrontación principal en la que el POUM, por su parte, intenta intervenir para competir con el populismo en la consecución de la tutela política sobre los anarcosindicalistas y convertirse, por esa vía, en el partido de la revolución que por sus propias fuerzas no podía ser.

Reforzado Tarradellas en el episodio de la caída del primer gobierno Casanovas se convirtió en las semanas siguientes en la pieza clave para un acuerdo estable entre republicanos y anarquistas, al que se sumaron los socialistas unificados y del que no quiso quedar fuera el POUM. Un acuerdo que se hizo necesario para todos una vez que la guerra se impuso como una realidad a largo plazo, y no como un hecho de pronta resolución. Por lo que se refiere a Cataluña, el frente se estancó en Aragón a la vez que se produjo el fiasco de la expedición a Mallorca; en esa tesitura no sólo quedó en evidencia la debilidad del gobierno monocolor de Esquerra Republicana, sino la capacidad efectiva, la autoridad real del Comité de Milicias que decía controlar ni la guerra ni el orden interior, pero que en la práctica no pudo hacerlo. El principio fundamental del acuerdo fue el de la “normalización” institucional, restableciendo la plena autoridad, particularmente territorial, jurisdiccional, del gobierno de la Generalitat, a cambio del reconocimiento de las ocupaciones de fábricas y de los espacios de poder asumidos en el ámbito militar y en el orden interior. El gobierno de unidad, constituido formalmente el 26 de septiembre, resultó un éxito político de Tarradellas y de Esquerra Republicana, antes que el triunfo real de la unidad deseada. Sus consecuencias inmediatas fueron la autodisolución del Comité de Milicias – a cambio, significativamente, de que la Secretaría de la Consejería de

Guerra fuera ocupada por García Oliver y la Presidencia de la Junta de Seguridad Interior por Aurelio Fernández, los dos faístas que hasta entonces habían encabezado la presencia anarcosindicalista en cada uno de esos ámbitos – y el restablecimiento de la autoridad institucional de los ayuntamientos en el ámbito local - lo que implicaba también la disolución de los comités locales –; eso sí, unos ayuntamientos reconstituido no a partir de nuevas elecciones sino de la misma fórmula de compromiso representativo con el que se configuró el “gobierno de unidad”. A partir de ahí Esquerra Republicana iría recuperando su presencia territorial. Con el decreto de reorganización municipal de octubre, Esquerra Republicana pasó a tener representación en el 86% de los ayuntamientos catalanes y a asumir su alcaldía en casi la mitad de ellos – el 48,5% - ; es decir se constituyó como la primera fuerza local durante la guerra, seguida de la CNT, que tuvo representación en el 83% y alcaldes en el 24% y del bloque PSUC-UGT con el 80% y el 17% respectivamente⁴. Cifras que abundan en la recuperación republicana y su presencia social y política después del primer impacto del golpe militar y la guerra. Por otra parte CNT reafirmó su preeminencia en la economía productiva, sobre todo en la industria, al ocupar ininterrumpidamente hasta junio de 1937, la Consejería de Economía, desde la que protegió el modelo de autogestión sindical, aunque el Decreto de Colectivizaciones del 24 de octubre fuera fruto del compromiso.

Ello constituyó un éxito político para Esquerra, que consolidó un cambio fundamental en la jerarquía del partido. Tarradellas ocupó sin discusión la segunda plaza, muy poco por debajo de Lluís Companys para quien la Presidencia de la Generalitat fue su principal baza, en tanto que la dirección operativa del gobierno dio a Tarradellas la de penetrar en un partido en el que había estado ausente durante más de tres años y medio de los poco más de cinco de su existencia, pasando por encima de figuras como Casanovas, presidente del Parlament de Catalunya, o Carlos Pi Sunyer, alcalde de Barcelona. En ese momento, y a rebufo también de sus diferencias con el gobierno de la República sobre el control de las finanzas, que asumió desde el 6 de agosto hasta el final de la guerra, Tarradellas construyó su imagen nacionalista, que no había tenido precisamente en su primera etapa en Esquerra acabada abruptamente en diciembre de 1932 por su enfrentamiento a los sectores nacionalistas del partido y a Maciá. En la sesión del 11 de noviembre de 1936 del Consejo de la Generalitat, tras un breve viaje a París, para desencallar obstáculos que dificultaban la adquisición directa por el Gobierno de la Generalitat de material de guerra, y en el que desarrolló una intensa agenda política, Tarradellas se sumó a una de las

ilusiones propias del nacionalismo radical catalán: la posibilidad de que ante el triunfo de los rebeldes en la guerra civil española Cataluña, con la protección de Francia, se convirtiera en un territorio soberano, separado de España en concepto de “zona fuera de la influencia de los estados fascistas”. La sugerencia fue bloqueada en el mismo Consejo por Comorera, quien advirtió del peligro de que se entendiera como una maniobra separatista, “perturbadora” para el curso de la guerra, pero ahí quedó dicha y no dejaría de reaparecer, por boca de otros (Batista i Roca, Casanovas, Rubió i Tudurí) en lo que siguió de guerra. Poco después de esa intervención de Tarradellas se produjo el oscuro incidente protagonizado por el Comisario General de Orden Público, Lluís Revertés, en el que se entremezclaron razones políticas y enfrentamiento de intereses muy personales, que salpicó a Joan Casanovas, involucrado en un hipotético complot independentista contra Companys y contra la CNT, que habría acariciado la misma ilusión de separar Cataluña de una España o fascista o revolucionaria. Tras el incidente Tarradellas, ausente en los días centrales del affaire – de viaje en Valencia para negociar las cuestiones económicas con el gobierno de la República – quedó dueño del campo nacionalista republicano, sin la competencia de un Joan Casanovas al que se le puso puente de plata para que huyera temporalmente a Francia, y quien sabe si con una nueva carta en sus manos por lo que se refería a sus relaciones con Companys. Poco antes, el 8 de noviembre se había celebrado una asamblea extraordinaria de ERC, la reunión del partido más importante desde el inicio de la guerra, con la participación de sus principales dirigentes, los diputados al Parlament de Cataluña y a las Cortes españolas, presidentes de las Federaciones comarcales, y los alcaldes y regidores de Barcelona y otras poblaciones importantes de Cataluña – que la información de *La Humanitat* del 10 de noviembre no precisa - . La reunión acabó con la interinidad que suponía la presidencia del partido en manos de Joan Casanovas, lo que había dejado de tener sentido una vez que había quedado desplazado desde finales de septiembre del Gobierno de la Generalitat, y la sustitución de la dirección que había encabezado por un secretariado integrado por Joan Tauler, Amadeu Aragay, Pere Ferrer y Joan Sauret, más la previsión de un órgano ejecutivo ampliado, el comité permanente, al que se sumarían los representantes de las Federaciones comarcales. La maniobra de desplazamiento de Joan Casanovas la impulsó Marià Rubió i Tudurí, mientras la elección del nuevo organismo de dirección fue interpretado como una reafirmación de la autoridad de Companys - que no participó en la reunión conforme al papel que había asumido de situar la Presidencia al margen, teórico, de la dinámica partidaria- frente a un Joan Casanovas que desde

hacía semanas iba estrechando sus relaciones con Estat Català. El *affaire* Revertés pudo proporcionar a Tarradellas información sensible sobre el comportamiento del Presidente de la Generalitat durante la crisis, lo que contribuyó a la configuración del nuevo *tandem* que iba a dirigir el republicanismo catalanista.

Con todo, la experiencia del gobierno unitario encabezado por Tarradellas encalló. Los anarcosindicalistas se resignaron al reconocimiento de la autoridad territorial-jurisdiccional del Gobierno de la Generalitat y enviaron sus delegados al mismo, pero nunca se consideraron parte del gobierno. Aceptaron, a regañadientes, la restauración de los ayuntamientos en perjuicio de los comités, pero no aceptaron el restablecimiento de la autoridad institucional ni en el ejército ni en el orden público; así, contra los acuerdos de gobierno, mantuvieron en pie las estructuras milicianas, la interferencia de los comités de obreros y soldados, el aprovechamiento partidario del control de la industria de guerra –una vez más en plena convergencia de intereses con Tarradellas - y la adquisición de equipo de guerra, la independencia de hecho de las patrullas de control con respecto al Consejero de Seguridad interior.....Por otra parte, el reconocimiento de los sindicatos en la nueva situación, la sindicación obligatoria, tuvo una consecuencia inesperada para el anarcosindicalismo, la del reforzamiento de la UGT que creció hasta amenazar con situarse a la par con CNT. La colectivización industrial no le dio la hegemonía absoluta a la que aspiraba desde su etapa fundacional en el mundo del trabajo, mientras en el campo las propuestas colectivizadas encontraron una fuerte resistencia de payeses y “rabassaires”. Los acuerdos del Gobierno no se cumplían y los incidentes se multiplicaban. De manera especial el militar de carrera Sandino, militar, Consejero de Defensa, se quejaba constantemente de que la militarización de las milicias no avanzaban, como tampoco lo hacía la llamada a filas de las levadas de 1934 y 1935 y la organización de nuevos regimientos; sin perder de vista la pervivencia de una violencia interna que se seguía atribuyendo a los “incontrolados” a pesar de la formalización de las patrullas de control. A comienzos de noviembre el gobierno de unidad estaba ya en crisis. Una crisis a la que la dirección republicana intentó responder con medidas burocráticas: la constitución de una “ponencia” en el seno del Gobierno para examinar los desacuerdos y los incumplimientos, así como una primera reunión – hasta mayo de 1937 se producirían un par más –del Gobierno en pleno con los representantes de las organizaciones que formaban parte de él, presidida por Lluís Companys. Buenas palabras, críticas más o menos abiertas de republicanos y socialistas unificados hacia el campo anarcosindicalista, situado a la defensiva, y nuevos

acuerdos sobre la militarización, las levas, la recogida de armas en la retaguardia, que una vez más quedaron en papel mojado.

El empantanamiento de la situación fue finalmente denunciado por Comorera, que en la reunión del 18 de noviembre manifestó formalmente que el gobierno estaba en tal estado de crisis que no se podía gobernar. Aquel mismo día Alemania e Italia reconocieron al gobierno de Burgos, circunstancia recogida por Comorera como anunciadora de un recrudecimiento de la guerra ante la cual no podía seguirse la política de paños calientes. El PSUC tomó la iniciativa y en la reunión de su Comité Central del 23 de noviembre⁵ acordó plantear la reorganización del ejecutivo de la Generalitat y la constitución de un nuevo “Gobierno de plenos poderes”, un término que, por cierto había utilizado antes Tarradellas limitándolo a su exclusiva función de consejero de finanzas, pero no haciéndolo extensivo a todo el gabinete; propuesta que dirigiría a la CNT y a Lluís Companys. Ese Gobierno habría de estar integrado por los dirigentes “más caracterizados” de las tres centrales sindicales, CNT, UGT y por Unió de Rabassaires y Esquerra Republicana. Lo de “más caracterizados” era para prevenir la paralización que pudiera suponer una representación de rango menor, obligada a constantes consultas con sus correspondientes organizaciones, como ocurría en el gobierno todavía actuante – los miembros de la CNT se escudaban frecuentemente en ese tipo de consultas -. Además se proponía la eliminación de las instancias que mediatizaban la actuación de los consejeros de Defensa y de Seguridad Interior – la Secretaria de Defensa y la Junta de Seguridad, constituidas en septiembre para dar satisfacción a García Oliver y a Aurelio Fernández, a cambio de la disolución de Comité Central de Milicias Antifascistas – y conceder plenos poderes para constituir su equipo a quienes asumieran dichas responsabilidades. Finalmente se proponía constituir un Consejo Superior de Defensa integrado por el Presidente de la Generalitat, el Consejero primero y los Consejeros de Defensa – que debía suponer el PSUC que seguiría siendo un militar – de Economía y de Servicios Públicos, siendo estas dos consejerías las que ocupaban respectivamente anarcosindicalistas y socialistas unificados.

La propuesta del Comité Central del PSUC tenía un mensaje implícito: la exclusión del POUM del nuevo gobierno. Un mensaje que se explicitó a los anarcosindicalistas y a Companys fundamentándolo en que las críticas de *La Batalla* a la Unión Soviética – la denuncia del primero de los tres grandes procesos de Moscú – entorpecían la relación con el único soporte exterior efectivo que tenía el bando republicano. La exclusión del POUM había sido requerida al PSUC

por el cónsul soviético y la delegación de las Internacional Comunista, que le reprochaba que hubiera permitido la entrada de los “trotskistas” en el gobierno de septiembre. Pero tenía otra razón, de mayor calado: a pesar de que el problema del incumplimiento de los acuerdos del gobierno de unidad se situaba en el campo anarcosindicalista se ofrecía al POUM como chivo expiatorio de lo sucedido y republicanos, anarcosindicalistas y socialistas unificados podrían empezar de nuevo sin pedirse cuentas pendientes.

La propuesta del PSUC fue notificada a sus interlocutores el 24 de noviembre. Mal día. Aquella misma tarde, ya de noche, el Consejero de Seguridad Interior, Artemi Aiguader, anunció a la prensa la destitución del Comisario General de Orden Público, Revertés. El incidente, antes comentado, impuso una temporal parálisis política, sin embargo la crisis de gobierno estaba ya planteada y explicitada por el propio Joan Comorera que en la reunión del Gobierno de la Generalitat del 25 de noviembre – la misma en la que se abordó el *affaire* Revertés – comunicó que ya se la había planteado a Companys y a la CNT. Companys no tuvo ninguna prisa. La gestión de la crisis de diciembre subrayó lo que pareció ser el estilo de Esquerra en esa primera etapa de la guerra: dar largas a las situaciones de conflicto para propiciar la maduración de las negociaciones con la CNT y la formulación de una nueva solución de compromiso. Pasaron tres semanas y cinco sesiones del Gobierno de la Generalitat en las que las reclamaciones de Sandino sobre la aplicación de la política militar acordada obtuvieron la respuesta reiterada de que había que esperar primero la resolución de la crisis. Por fin el 15 de diciembre se llegó al acuerdo y el 16 se formaba el nuevo Gobierno, del que quedaron excluidos el POUM y Acció Catalana Republicana, bajo el pretexto de la representación combinada entre las dos centrales sindicales y la representación de la clase media que se le atribuía, en términos sociales y políticos, a Esquerra. La resolución, empero, tuvo desde el primer momento elementos de falsa solución. Convertido el POUM en chivo expiatorio, se eludió el debate de las discrepancias entre republicanos y socialista unificados por un lado y anarcosindicalistas por otro. Además no solo no se creó el Consejo Superior de Defensa, sino que la Consejería de Defensa, hasta entonces en manos de un militar republicano, fue entregada a la CNT, al faísta Isgleas que a partir de entonces procedió a arrinconar a los cuadros republicanos que habían dominado mayoritariamente la estructura administrativa de la Consejería, empezando por Llorenç Perramon, un cuadro básico del segundo nivel de ERC que hasta entonces había liderado a los funcionarios y empleados republicanos de la Consejería de Defensa. Los anarcosindicalistas, en

el punto de mira del incumplimiento de los decretos de militarización de las milicias y de movilización de levas, vieron paradójicamente reforzado su control del área militar, ya importante en el frente y ahora también en la administración de la retaguardia. Por otra parte, la gestión del orden público fue sometida a una suerte de tricefalia por la mediatización de la responsabilidad del Consejero de Seguridad Interior - que mantuvo Esquerra - al repartir los cargos inmediatos de la Consejería entre la CNT-FAI (atribuyendo a Dionisio Eroles la Jefatura de Servicios y el PSUC (que ocupó la Comisaría General de Orden Público por medio de Eusebio Rodríguez Salas); la presencia de Esquerra en la Consejería, quedaba reforzada en teoría por el nombramiento de Josep Soler Arumí, un activista involucrado en la participación republicana en la violencia de retaguardia – y quien sabe si en la eliminación física de Revertés - como Inspector de Servicios.

ERC había respondido a la presión del PSUC, pero renovando su línea de compromiso con los anarcosindicalistas. Las protestas de Lluís Companys en favor de la imposición de una línea de autoridad gubernamental, que aparentemente coincidían con la reclamación del PSUC de un gobierno de plenos poderes – Companys decía de “plena responsabilidad” –, quedaron muy matizadas por la política de contrapesos de Tarradellas de apoyarse en el peso social de la CNT para contrarrestar la presión política del PSUC. Una política de contrapesos que no era, como diríamos ahora, de equidistancia; Tarradellas había establecido mejores relaciones con los anarquistas que con el PSUC. El PSUC, por su parte, se complació en el avance relativo de su presencia en el Gobierno, en el que pasó de controlar dos a tres consejerías, en la mayor trascendencia de éstas al haber asumido desde el 17 de diciembre la de Abastecimientos – en la que esperaba capitalizar los suministros soviéticos de productos alimentarios –, con el añadido de haber sustituido al POUM en la de Justicia, y en el mayor peso conseguido en el reparto del Orden Público, con la ocupación de la Comisaría General de Orden Público.

La historia del segundo gobierno encabezado por Josep Tarradellas duró cuatro meses, con un saldo positivo en la regulación financiera de la economía catalana y de la administración autonómica; sin embargo siguió siendo negativo en el área militar, el orden público y la recurrente conflictividad en el campo como consecuencia del enfrentamiento entre colectivizadores por un lado y “rabassaires” y payeses defensores de la explotación familiar por otro. La figura de Tarradellas creció, potenciada por su plan de reordenación financiera y económica – el Plan Tarradellas, aprobado el 18 de enero de 1937 – de modo que su política fue,

para bien y para mal, la política de Esquerra Republicana, mientras Companys quedó en otro plano, en su cargo de Presidente de la Generalitat, desempeñando en términos de autoridad no ejecutiva. En la práctica Tarradellas, como jefe ejecutivo de gobierno dejó hacer a sus consejeros, actuando de mediador en las discrepancias entre la CNT y el PSUC pero sin imponer autoridad propia, a cambio de actuar con plenos poderes en la regulación financiera. Su mayor cercanía a los anarcosindicalistas se manifestó en el desempeño de las industrias de guerra, puestas formalmente bajo su autoridad formal pero operativamente en las manos del faísta Eugenio Vallejo, quien controlaba los flujos de producción y distribución. El Plan Tarradellas fue su éxito fundamental. La filosofía del plan teorizaba la práctica de equidistancia, como ha sido puesto de relieve por Francesc Roca⁶, con su idea de la “república auténticamente democrática” que refleje un “inteligente acercamiento de los procedimientos socialista y anarquista”. El núcleo duro de sus disposiciones lo constituyó la dotación a la administración de la Generalitat de los instrumentos necesarios para su financiación interna, entre los que destacaba el “impuesto sobre la cifra de negocios” – una anticipación del IVA, en términos de Francesc Roca, la regularización de la política monetaria y del funcionamiento bancario y de seguros, el reforzamiento del papel de los ayuntamientos y la regularización de las haciendas municipales, a la vez que la previsión de la municipalización de servicios. Empezó el proceso de normalización financiera de la economía, hizo posible el funcionamiento de la administración autonómica – cargada por la asunción de facultades más allá del Estatuto de 1932 en materia de orden público, de guerra, de educación, por el incremento del personal a cargo de la administración autonómica, pero también por la creciente arribada de refugiados de las zonas de España que iban cayendo en manos de los rebeldes – y potenció la administración municipal, que como ya se ha visto era un campo fundamental en la recuperación del control territorial.

Mejóro la situación económica, mejoró la administración local y la presencia local republicana, pero no la situación política. Eliminado el tercero en discordia, que era el POUM, la confrontación entre CNT y PSUC no paró de crecer de modo que la situación militar y la del orden público se enquistó en la irresolución de sus problemas. A pesar de las campañas de propaganda el Ejército Popular seguía pendiente de organización y la Consejería de Defensa boicoteó la movilización de levadas, por no hablar de la incapacidad para conseguir la recogida de armas largas en la retaguardia, para enviarlas al frente, reiteradamente acordada en el seno del gobierno y cuyo incumplimiento se convirtió en un tópico del momento. En el orden interno el

Cuerpo de Patrullas de Control de Barcelona y otros grupos de patrullas locales o sectoriales – de L’Hospitalet, Terrassa, las patrullas ferroviarias, las de sanidad – no sólo siguieron sin someterse a la autoridad del Consejero de Seguridad Interior, como se había acordado “por arriba”, sino que intervenían en los conflictos ajenos, como ocurrió por en los sucesos de La Fatarella, a finales de enero. En febrero se dibujaron dos dinámicas antagónicas. Por un lado un acuerdo en el seno del Gobierno de la Generalitat sobre el impulso a la reorganización militar y sobre todo respecto a la reorganización de los diversos efectivos policiales y parapoliciales – guardia de asalto, agentes de inspección y vigilancia, guardia nacional republicana y patrullas de control – en un único Cuerpo de Seguridad interior, que culminó en su aprobación unánime en el Gobierno y la publicación del oportuno decreto del 1 de marzo de 1937. Por otro, una fronda interna en el seno de CNT-FAI, contra las posiciones más conciliadoras con el poder político, no sólo contra los anarcosindicalistas moderados, como Peiró, sino también contra los faístas que habían asumido la tesis del colaboracionismo gubernamental, la Federica Montseny y el mismo García Oliver; un movimiento interno disperso, en el que coincidían Ascaso, elementos de los sindicatos de la alimentación – que se habían enfrentado a la gestión de Comorera en la Consejería de Abastecimientos – del metal, el intrigante Escorza, los cuadros de las patrullas de control o Jaume Balius – promotor de la Asociación de Amigos de Durruti – y que recogía la inquietud de los cuadros anarcosindicalistas intermedios por el crecimiento de la UGT, favorecida precisamente por el decreto de sindicación obligatoria, y las dudas generales sobre las consecuencias de la colaboración gubernamental. La fronda anarquista llegó a amenazar la elección de Valerio Mas como secretario del Comité regional de la CNT en el congreso celebrado en los días finales de febrero.

La oposición al decreto de unificación policial se intensificó cuando al intentar su aplicación Artemi Aiguader reclamó, como Consejero de Seguridad Interior, el nombramiento del nuevo cargo de director general de seguridad, que establecía dicho decreto, como segunda jerarquía de la consejería; reclamación a la que se opuso la CNT, que también reivindicó el cargo para uno de los suyos. El PSUC apoyó a Aiguader, pero Tarradellas, por el contrario, prefirió evitar un choque directo con los anarquistas y ante la falta de acuerdo optó una vez más por aplazar la decisión para ganar tiempo para una nueva negociación. La táctica dilatoria no resultó esta vez eficaz sino que por el contrario, dio fuerzas a la disidencia anarquista, que también puso sobre la mesa su rechazo a la movilización inmediata de quintas. El resultado fue un mes perdido entre

vacilaciones gubernamentales y el crecimiento del descontento anarquista, en el que el POUM vio la ocasión para volver al primer plano político con la esperanza de poder convertirse ahora en la dirección política de las masas anarcosindicalistas, a través de un proceso de movilización para la recomposición del poder. A fuerza de alargarse, la crisis se pudrió en manos de Tarradellas y de Companys, que finalmente se vio obligado a intervenir para conseguir un acuerdo que permitiera la recomposición del gobierno de unidad. Tardó demasiado en llegar. Cuando lo hizo por fin, a mediados de abril, el enfrentamiento político había avanzado demasiado, y se había complicado con el deterioro de la situación del gobierno Largo Caballero y la hipótesis del gobierno sindical, interpretado en Cataluña en términos de mayor representación anarcosindicalista e incluso de recuperación de la hegemonía anarcosindicalista. El nuevo gobierno, una vez más encabezado por Tarradellas como “primer consejero”, se constituyó el 16 de abril, con la misma correlación de fuerzas que el anterior y la ocupación de las mismas carteras por parte de ERC, CNT-FAI, UGT-PSUC y Unió de Rabassaires; sólo algunos cambios de nombres, demasiado poco para frenar la confrontación en marcha que estaba ya al cabo de la calle. Sin tiempo para sentarse un par de veces juntos el nuevo gobierno, el asesinato del cuadro del PSUC Roldán Cortada, el 25 de abril y el enfrentamiento en Puigcerdá entre los carabineros y el comité local encabezado por el faísta Antonio Martín, prologaron los acontecimientos que desembocaron en la insurrección del 3 de mayo y que acabó con la etapa de los gobiernos Tarradellas.

He sostenido en otros trabajos que no hay que buscar conspiraciones extrañas para explicar los Hechos de Mayo en Barcelona⁷, que no sólo tuvieron lugar en Barcelona sino en diversas poblaciones de Cataluña. Fueron el resultado final de la confrontación que vivió la política de unidad, la irresolución del gobierno de unidad. No una confrontación general, aunque los contendientes así la presentaran para legitimarse, sino una confrontación por el control concreto de áreas determinadas. Fueron el resultado del fracaso de la política de equidistancia desigual que Tarradellas desarrolló, sobre todo a partir de diciembre de 1936, y de las tácticas de negociación dilatada que caracterizaron el ejercicio del poder por parte de los republicanos. Finalmente, el enfrentamiento armado y la incapacidad del Gobierno de la Generalidad para dominarlo pusieron en evidencia la autoridad autonómica⁸. Cuatro días después, la intervención del Gobierno de la República - solicitada desde el primer día y proporcionada no tan diligentemente como debió serlo - hizo posible el fin de la lucha y configuró una nueva situación

política. La CNT no consiguió su objetivo de modificar la correlación de fuerzas gubernamental y menos el freno o la reversión de la normalización institucional, por lo que en términos políticos fue la principal derrotada, y el POUM pagó su intervención, subjetiva y aventurera, haciendo una vez más de chivo expiatorio, esta vez de manera definitiva con su ilegalización. Pero la incapacidad del gobierno autonómico, y en última instancia de Esquerra Republicana que era su principal responsable, significó un claro paso atrás en su facultad de autogobierno, capacidad que había sido incrementada por los acontecimientos de julio de 1936. Estos habían permitido una ampliación de hecho de competencias que iban más allá de lo establecido por el Estatuto del 32, lo que conscientemente propició y gestionó Esquerra, con el apoyo de la CNT y del PSUC, en campos muy diversos. Un detalle significativo de esa ampliación de competencias fue la disposición de que no sería aplicable en Cataluña ninguna medida acordada por las instituciones de la República si no se publicaba previamente, lo que sería prescriptivo, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. El Gobierno de la República respondió a la crisis de mayo de 1937 recuperando su exclusiva competencia en la política militar y asumiendo el control del Frente de Aragón, así como la competencia – que se había empezado a recuperar en abril – en el control por los carabineros de las fronteras y echó mano de las disposiciones del Estatuto para intervenir el Orden Público, asumiendo su dirección política y operativa aunque manteniendo en manos de la Generalidad la administración del Cuerpo Unificado de Policía; no obstante siguió permitiendo la intervención del Gobierno de la Generalitat más allá de lo establecido por el Estatuto en áreas como la enseñanza, la economía, las relaciones laborales y se mantuvo la publicación de las disposiciones del gobierno central en el Diario Oficial de la Generalitat; más adelante el Gobierno de la República recuperó también la competencia de abastecimientos. La autonomía catalana perdió parcelas importantes que había gestionado entre julio – más propiamente entre septiembre – de 1936 y mayo de 1937, pero siguió rebasando los límites del Estatuto y volver a ellos no era algo contemplable ni para Esquerra Republicana ni para el PSUC, que ocuparon, cara a cara, el protagonismo político, sobre todo después de que a finales de junio de 1937 un cálculo político erróneo, y acaso la resaca de mayo, llevó a la CNT a quedarse fuera del gobierno de la Generalitat.

En la nueva composición del gabinete - la última hasta el final de la guerra - se dibujó una aparente paridad entre Esquerra y el PSUC, con tres consejerías para cada uno de ellos, aunque la representación de Acció Catalana Republicana (Bosch Gimpera) estaba más decantada a favor de

Esquerra que la de la Unió de Rabassaires a favor del PSUC, con el que había coincidido de manera creciente en la etapa anterior en el rechazo de la política colectivizadora de la CNT para empezar a marcar algunas distancias en la nueva etapa, ante la división interna en el seno de la organización rabassaire entre pro-republicanos y pro-socialistas unificados. Lluís Companys, como Presidente de la Generalitat, presidiría de nuevo directamente el gobierno de la Generalidad sin volver a delegar dicha función, como lo había hecho desde agosto de 1936 primero en Joan Casanovas y luego en Josep Tarradellas, y en esa situación procuraría jugar un papel arbitral entre ERC y PSUC, por más que, en las opciones generales, las suyas y las de Esquerra coincidían y se alimentaban mutuamente. Más allá de ese reparto aritmético de la correlación de fuerzas el PSUC aumentó su cuota de poder real al sumar a las consejerías de Trabajo y de Abastecimientos, que venía ocupando desde diciembre de 1936, la de Economía - que hasta entonces había estado siempre en manos de la CNT - la que de manera más directa incidía sobre el área de la economía colectivizada. Todo ello supuso un cierto retroceso político de los republicanos, sobre todo por el ascenso de los socialistas unificados, que ya no podía ser contrarrestado mediante juegos con los anarcosindicalistas; pero ese retroceso no fue tanto como sugirieron las protestas de los republicanos ante Azaña, ni las memorias del exilio, que atribuyeron al PSUC una hegemonía que nunca llegó a alcanzar. Ciertamente la primacía de Esquerra se vio amenazada por un competidor político directo, al que no podía esperar neutralizar ni integrar en propuestas de complementariedad, como había hecho con la CNT en el pasado, pero la amenaza no llegó a convertirse en un hecho consumado y, por el contrario, Esquerra actuó intensamente para evitarlo. El PSUC no pudo invertir los términos e ir más allá de su condición de aspirante, aunque Esquerra, que tras la instalación del Gobierno de la República en Barcelona quiso jugar a fondo su carta también en la política española, se llevara un grave revés con la crisis de agosto de 1938.

Al cabo de poco más de un mes de los enfrentamientos de mayo, se convocó el segundo Pleno de Esquerra durante la guerra civil, que se celebró el 12 de junio. La crisis y su desenlace habían alterado el mapa político catalán y modificado las relaciones entre Cataluña y el Gobierno de la República. Aunque el chivo expiatorio de la crisis fuera el POUM era evidente que el principal derrotado político era la CNT, y con ello la política de equidistancia desequilibrada entre anarcosindicalistas y socialistas unificados desarrollada por Tarradellas - que tampoco había sido capaz de evitar finalmente la confrontación - estaba gravemente en entredicho. Por otro

lado, la derrota de la insurrección había reforzado la posición de quienes defendían el fin de los experimentos revolucionarios. Era una situación compleja. Esquerra se sentía por un lado reafirmada en su defensa de la institucionalidad republicana, pero con menor capacidad de maniobra social y política por el traspies de los anarcosindicalistas; por otra parte, el PSUC, con el que había compartido la política de normalización institucional, pero que nunca había sido estrictamente su aliado, surgió ahora no sólo como un competidor, sino como un rival claro por la dirección política del país. El Pleno combinó temores y decisiones. Temores por el reforzamiento del PSUC y por la reaparición del poder central en el escenario catalán; temor a que, como lo expresó el diputado a Cortes Marià Rubió i Tudurí, alguien pasara a actuar en la política catalana buscando su apoyo en Valencia o más lejos – en Moscú –, en clara alusión al PSUC. Ante la nueva situación el Pleno de Esquerra decidió enfatizar su identificación “democrática y liberal”, dejando atrás el discurso revolucionario - que también ella había adoptado en los primeros meses de la guerra - y se decantó por un gobierno de la Generalitat de perfil político explícito – Rubió i Tudurí dio por descontada la exclusión de los sindicatos – de Frente Popular, en el que el referente de lealtad fuera la propia Esquerra, y por la reanudación inmediata de la actividad parlamentaria. Al propio tiempo se apostó por una nueva política de alianzas basada en la consolidación de un frente nacionalista con Acció Catalana Republicana y Estat Catalá. Para impulsar la nueva política se eligió un nuevo organismo de dirección ejecutiva, el Secretariado, integrado por un “histórico”, Martí Barrera, como secretario general, Jaume Miravittles, quien junto con Rubió i Tudurí había marcado la orientación política del Pleno, dos miembros del Consejo Permanente saliente, Sauret y Tauler y por dos cuadros con muy buena relación con Tarradellas – por no decir “tarradellistas” - Lluís Mestres y Antonio Escofet. Un par de meses más tarde, en septiembre, Marià Rubió y Tudurí, uno de los protagonistas del Pleno, abanderado de una rectificación a fondo de la política republicana, con la recuperación de la imagen “democrática y liberal”, el distanciamiento de la URSS y el pleno alineamiento de la República con Francia y Gran Bretaña y finalmente la exploración a fondo de la hipótesis de finalización de la guerra mediante la negociación, fue nombrado director de *La Humanitat*, el diario enseña del partido⁹.

La competencia creciente entre el PSUC y ERC, se centró en el verano de 1937 en el pleito sindical. La ruptura de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC) con UGT, a mediados de junio, pareció dar alas al proyecto de constitución de un tercer referente sindical

catalanista, alternativo a UGT y CNT, sobre la base de arrastrar también a la ruptura con la UGT al histórico sindicato de la dependencia mercantil , el Centre Autonomista de Depenents del Comerç i de la Indústria (CADCI), la Associació de Funcionariss de la Generalitat y la Associació de Funcionaris Municipals, que conjuntamente con los estudiantes sumaban la quinta parte del total de efectivos de la central socialista en Cataluña. El resultado del pleito resultó negativo para Esquerra y Estat Català, que sí actuaron en él de común acuerdo, y finalmente, en julio de 1937, los tres sindicatos citados decidieron, en muy tensas asambleas, mantenerse en el seno de la UGT de Cataluña. Aunque tras ello recuperó posiciones en el sindicalismo agrario, Esquerra Republicana no consiguió constituir su propia fuerza sindical. Por el contrario, prosperó en su esfuerzo de regularizar su organización militante hasta conseguir imponer, aunque fuera por poco, su presencia mayoritaria en el conjunto de Cataluña y en sus principales poblaciones. De acuerdo con una estadística del propio PSUC, cuya credibilidad viene avalada por datos de la propia Generalitat en el exilio¹⁰, Esquerra Republicana tenía al acabar el tercer trimestre de 1937 más afiliados que el PSUC en toda Cataluña, (exceptuando la ciudad de Barcelona para la que se disponen de datos del PSUC pero no de ERC): casi 34.000 afiliados de Esquerra por 26.000 del PSUC. Los republicanos tenían más afiliados que el PSUC en la absoluta mayoría de las comarcas – 22 de las 35 en las que hay datos comparables – entre ellas en las del Tarragonés, Gironés, las dos de las respectivas capitales de provincia, las del Bajo Llobregat, el Maresme y el Vallés oriental, colindantes con el Barcelonés, y también en algunas de las comarcas más pobladas del interior, como el Bages (Manresa), Osona (Vic), Anoia (Igualada); el PSUC solo superaba a los republicanos en 9 de las 35, destacando el Vallés occidental, por su posición hegemónica en Sabadell, y el Alto Ampurdán (Figueras); en las otras 4, entre ellas la del Segrià (Lérida), las fuerzas se igualaban. A comienzos de 1938 la propia dirección del PSUC insistía en quejarse de la superioridad numérica de la militancia de Esquerra Republicana de Catalunya en muchas comarcas y poblaciones¹¹. A pesar de su carencia sindical, a excepción del mundo agrícola, Esquerra tenía una buena presencia militante e institucional en el territorio; recuérdese la cuota de poder municipal que ocupaba y que desde la primavera de 1937 ya no tenía que hacer frente a los para ella malhadados comités. Por otra parte siempre dio por supuesto que seguiría teniendo a su lado la mayoría del electorado, suposición que reforzaba por la imposibilidad de convocar elecciones al Parlamento catalán mientras durara la guerra. Por todo ello y por la tendencia del nacionalismo a considerarse como el representante genuino del país, consideraba

que ella había de ser el eje y el referente político indiscutible de Cataluña y más aún después de la automarginación de los anarcosindicalistas.

No obstante la aplicación de la línea política acordada en el Pleno de junio se quedó a medio camino. La alianza nacionalista, con ACR y EC, no tenía la fuerza que la anterior política de equidistancia desigual con socialistas unificados y anarcosindicalistas y mientras la propuesta de reactivación del Parlamento acabó en nada, o si se quiere siguió quedándose en todo lo contrario. Antes que reactivación parlamentaria lo que se produjo fue una ratificación del comportamiento ejecutivo sin control parlamentario. La ley del 18 de agosto estableció la prórroga del Parlamento de Cataluña, que en su sesión del 9 de noviembre ratificó y confirmó a Companys como Presidente de la Generalitat. El Parlamento de Cataluña no desarrolló ningún debate político y, a pesar de las protestas del diputado de Unió Democràtica Pau Romeva, se limitó a legitimar la acción en solitario del ejecutivo catalán. Todo lo más se convirtió en escenario de las luchas por el poder, políticas y personales, como las que protagonizaron el PSUC y ERC con motivo del retorno de Joan Casanovas a Cataluña, para asumir de nuevo la presidencia del Parlamento, en contra del criterio del PSUC, que no olvidaba la maniobra nacionalista en la que se había visto envuelto en noviembre de 1936. El retorno de Joan Casanovas, acompañado también por Ventura Gassol, pareció reforzar la línea que defendían Rubió i Tudurí y Martí Barrera - éste más discretamente - pero planteó un problema interno importante en el seno de Esquerra Republicana al convertirse en un aspirante a suceder en la Presidencia de la Generalitat a Lluís Companys. Éste, tras algunas vacilaciones – es difícil discernir hasta que punto eran sinceras o se trataban de fintas provocadoras – decidió optar por la reelección, con el pleno apoyo del PSUC para el que la alternativa Casanovas era peor, aún más, inaceptable; tampoco Tarradellas, podía ver con buenos ojos opción Casanovas sin que, por su parte, estuviese en condiciones de competir con Lluís Companys. Una vez que éste había optado por la prórroga de su mandato hasta que el final de la guerra permitiera nuevas elecciones al Parlament, era desde luego muy difícil oponerse a esa decisión. Por cierto que en la entrevista que mantuvo Tarradellas con Azaña, el 29 de julio¹², además de expresar sus exagerados temores de una dictadura comunista en Cataluña y de ratificarle la propuesta republicana de constituir un “frente democrático” que habría de imponerse sobre el resto de opciones, Tarradellas le anunció que, una vez reintegrado a Esquerra¹³, asumiría la secretaria general, para la que hacía un mes que había sido elegido Martí

Barrera. ¿Tan convencido estaba Tarradellas de sus posibilidades o es que ya había empezado a maniobrar para controlar el aparato del partido?

El cambio de rumbo esbozado en el Pleno de junio de 1937, fue diluyéndose en el otoño de aquel mismo año para acabar eclipsado por una novedad: la instalación del Gobierno de la República en Barcelona anunciado a finales de octubre. Esta instalación tuvo trascendencia no sólo en el ámbito de la gestión del Gobierno de la Generalidad, suficientemente conocidas, sino también en la estrategia política de Esquerra Republicana que, recelosa de Negrín desde que éste discutiera más que negociara con Tarradellas las cuestiones de la financiación de la Generalitat, decidió combatirlo desde el propio terreno de la política general del bando republicano. Reelegido Presidente de la Generalitat, Companys marchó a Francia y Bélgica entre el 12 y el 22 de noviembre. Un viaje político cuyos detalles no conocemos pero del que sabemos sus encuentros con el Presidente del gobierno vasco Aguirre en París y con Paul Henri Spaak, ferviente defensor de la política de apaciguamiento, con el que participó, curiosa circunstancia en un acto conmemorativo del armisticio de la primer guerra mundial. El viaje se produjo en los días que siguieron al acuerdo del Comité de No Intervención sobre la retirada de voluntarios extranjeros, que quiso ser visto, por una parte del bando republicano - Azaña al frente - como el anuncio de un armisticio que pusiera fin a la guerra. Una coyuntura en la que Aguirre, propuso a Companys presionar conjuntamente a Negrín para que el Gobierno de la República les tuviera en cuenta a la hora de responder a la supuesta trascendental iniciativa¹⁴. Lejos de hacerlo así, Negrín, para escándalo de Azaña, desmintió públicamente los rumores de armisticio. Desmentido subrayado semanas después por el inicio de la ofensiva republicana en Teruel el 14 de diciembre. En las siguientes semanas, las relaciones entre Esquerra y Negrín empeoraron, al tiempo que el Gobierno de la República exigió al de la Generalitat la entrega al Banco de España del oro, la plata, las divisas y los valores extranjeros que ésta tuviera (reunión del Consejo de la Generalitat del 18 de enero), lo que propició un par de borrascosos encuentros entre Tarradellas y Sbert con Negrín. En sus memorias publicadas en 1975 Carles Pi i Sunyer¹⁵, se lamentó de que la ofensiva de Teruel llevara la guerra a un frente, el catalano-aragonés, débil y sin suficientes reservas, es posible que ya se pensara así en el momento de la ofensiva, lo que debió ampliar la brecha entre Esquerra y Negrín.

La respuesta de ERC fue la celebración de un nuevo Pleno, que habría de tener lugar el 26 y el 27 de febrero, pocos días después de la recuperación de Teruel por parte de las tropas de Franco.

La asamblea tuvo todas las características de un congreso, adoptando acuerdos programáticos y políticos y eligiendo una nueva dirección con mayor peso que la que había encabezado Martí Barrera. El Pleno ratificó la voluntad de mantener la autonomía de Cataluña en el nivel de competencias de derecho y de hecho, más allá del “raqúitico” marco del Estatuto de 1932 y reclamar una mayor intervención del Gobierno “de Cataluña” en el Gobierno republicano y en la dirección de la guerra proporcional al esfuerzo y volumen de su participación. En el orden interno, si bien se aceptaba mantener “los avances económicos y sociales”, se manifestaba al propio tiempo la voluntad de volver a un régimen “democrático y liberal” una vez acabada la guerra; en esta última línea, Tarradellas había planteado en el Consell de la Generalitat del 26 de enero la disolución de la Comisión Mixta de Control de la Propiedad Urbana, en manos de los sindicatos, sin que prosperar por la negativa del PSUC a ningún cambio en ese ámbito hasta que no se acordara un reglamento general de municipalización de la vivienda. Para llevar esa política de rectificación en Cataluña e intervencionista en el seno de la política republicana se eligió un nuevo Consejo Directivo ahora sí encabezado por Tarradellas, ya hombre fuerte del partido, como secretario general, e integrado también por Carles Pi i Sunyer, Josep Andreu Abelló, Joan Sauret y Miquel Santaló, al que se sumaría, como secretario y sin voto, un fiel tarradellista, Antoni Escofet.

La prueba de fuego de la nueva dirección fueron los dramáticos acontecimientos de marzo de 1938, con el inicio de la ofensiva franquista en el Frente de Aragón, el 9 de marzo, la intensificación de los bombardeos sobre ciudades catalanas, y el intento de Azaña de promover un cambio de gobierno con mayor peso republicano y favorable a sus tesis sobre la finalización de la guerra mediante un armisticio y negociaciones inmediatas, que culminaron en la manifestación del 16 de marzo, convocada por los comunistas contra cualquier iniciativa en tal sentido, mientras estaba reunido el Consejo de Ministros presidido por un Negrín del que algunos sospecharon que estuvo en connivencia con la manifestación o que, cuando menos, fue muy tolerante con ella. La dirección del PSUC propuso a Tarradellas aumentar la presencia catalana en el Gobierno de la República a dos ministros a cambio del apoyo del PSUC a la destitución de Prieto, pero Tarradellas lo rechazó¹⁶. No estaba en sus previsiones una política de pactos con el PSUC y tampoco la política de alianzas republicanos había llegado a dar ningún fruto concreto; además, la manifestación del 16 de marzo había puesto de relieve la importancia de la capacidad de movilización y de la ocupación de la calle. Tarradellas ya le había anunciado

el 29 de julio a Azaña su propósito cuando le comentó que “entre la CNT, con todos sus errores, y los comunistas es preferible la CNT”, a lo que Azaña no pudo evitar apostillar “eso no sería una novedad”¹⁷. Con las riendas formales de Esquerra en sus manos, se dispuso a reactivar su anterior política, pero ahora ya no de equidistancia desigual entre el PSUC y la CNT, sino de clara aproximación a ésta – de hecho, instrumentalización - contra el enemigo común comunista. En la sesión del Consejo Directivo del 22 de marzo, que analizó los sucesos del 16 y sus consecuencias, impulsó la “nueva etapa política de Esquerra Republicana de Catalunya” con el proyecto de incorporar a la CNT al comité catalán del Frente Popular y, sobre todo, al Gobierno de la Generalitat, no sin tener que vencer las reticencias de Andreu Abelló y de Santaló, que hubieran preferido mantener la línea de estricta alianza republicana y nacionalista; además Tarradellas planteó aprovechar la remodelación de la Generalitat para recabar para Esquerra la Consejería de Economía.

La reactivación de la entente con la CNT, para ser más precisos con la CNT catalana, y la resignación ante la continuación de la guerra se cobró sus víctimas políticas en el interior de Esquerra. La primera Mariá Rubió i Tudurí, debilitado por sus indiscretos contactos con el embajador francés Labonne y por el supuesto de que, en última instancia, no vería con malos ojos una transferencia de la soberanía de Cataluña a Francia si ello suponía verse fuera de la guerra de España, algo que Rubió y Tudurí negó que postulase pero que corría como rumor y fue tema en alguna de las entrevistas de Azaña. El 29 de marzo el director de *La Humanitat* fue relevado de su cargo. La otra víctima política fue Joan Casanovas, de nuevo en Francia después de ver frustrada su ambición de sustituir a Companys, que fue instado por la dirección de Esquerra a regresar al país a lo que se negó, a mediados de abril, ofreciendo a Tarradellas su dimisión, lo que por cierto éste se guardó de comunicar a su partido durante varios meses. Tarradellas pudo controlar plenamente el partido, sin que ni Pi i Sunyer ni Andreu Abelló ni Santaló le plantearan más problemas que algún mayor esfuerzo de discusión o persuasión en el seno de la dirección de Esquerra; la única limitación a su gestión era el papel institucional que quería desempeñar Lluís Companys, que le obligaba a juegos de equilibrio con el PSUC y le llevaba a sus propias maniobras de política exterior “paralela”, como la que representarían las peregrinas gestiones en Londres de Batista i Roca, en abril y junio de 1938, cuyo toque de fantasía parece más propio de Companys y de su colaborador en estos temas, Jaume Miravittles, que de Tarradellas, quien siempre tuvo un mayor sentido de la realidad y del cálculo. Por cierto

que Moradielos en su biografía de Negrín califica la actuación de Batista y Roca como una gestión del Gobierno de la Generalitat. No fue tal; Batista Roca podía actuar en nombre de Companys, o jugando con el equívoco de que pudiera representar al Presidente de la Generalitat, pero su actuación no respondió a ninguna decisión del Gobierno, en el que estaba presente el PSUC, y que no la habría aceptado.

La incorporación de la CNT al comité catalán del Frente Popular, avalada también por el PSUC que de hecho ya se había adelantado a Esquerra en la formulación de tal propuesta, el 10 de marzo, se materializó sin ningún problema en su reunión del 29 de marzo, en la que también se incorporaron la FAI y Estat Catalá, marginado hasta entonces de las instituciones y de los organismos unitarios por decisión común de Esquerra y de la CNT. Pero desde el primer momento la cuestión de la reincorporación de la CNT al Gobierno de la Generalitat, que Esquerra quiso que fuera una de las primeras propuestas del Frente Popular de Cataluña, se encontró con la oposición cerrada del PSUC. La maniobra de ampliar el Frente Popular para presionar inmediatamente la ampliación del gobierno se encalló, pero Tarradellas no perdió nunca de vista ese objetivo.

Paralelamente a la remodelación del gobierno catalán, ERC buscó un acuerdo firme con los partidos republicanos en el campo de la política española, con Izquierda Republicana, Unión Republicana y el PNV, convertido desde la caída del País Vasco en su aliado más fiel. Las primeras gestiones las había iniciado ya el secretariado de Martí Barrera, pero se intensificaron con la nueva dirección encabezada por Tarradellas, actuando como interlocutores más habituales de los republicanos españoles Pi i Sunyer y Miquel Santaló¹⁸. Este último explicó que en abril se habría llegado a un principio de acuerdo, en contra de la política de Negrín y de la influencia comunista, que Esquerra intentó una maniobra contra Negrín, pero que la dimisión de Prieto y la proclamación de los Trece Puntos, con las reuniones de la Diputación Permanente de las Cortes, el 15 de abril y el 14 de mayo, que ratificaron la confianza en Negrín, dio al traste con la maniobra. En los meses siguientes, Esquerra siguió actuando en los dos frentes, sin conseguir avances sustanciales, pero dejando clara su posición política. El cierre de la frontera francesa el 14 de junio, tras la sustitución del gobierno Blum por el gobierno Daladier disparó de nuevo las alarmas y Esquerra intensificó su presión. En el gobierno de la Generalitat, sobre cuya ampliación a CNT insistía – lo planteaba de nuevo como gobierno de Esquerra con las dos sindicales o, en su defecto, también consideraba como alternativa un gobierno sólo republicano –

Tarradellas presentó en julio un conjunto de tres decretos destinados a visibilizar la nueva orientación democrática de la Generalitat: pago de la deuda de la Generalitat, devolución de la propiedad urbana a los ciudadanos que no hubieran sido declarados explícitamente facciosos y disolución de la Oficina Reguladora del Pago de los Salarios, integrada en Economía con lo que ésta consejería perdía uno de sus instrumentos principales de intervención en la industria colectivizada. Aquel mismo mes, en el plano de la política republicana, Esquerra conseguía la constitución del Secretariado de Relaciones de Partidos Republicanos, primer paso para relanzar la presión conjunta para modificar, total o parcialmente, el Gobierno de la República y, en cualquier caso, frenar la política de guerra de Negrín; aunque Pi i Sunyer, escarmentado por el proceso de abril y no sin razón, desconfiaba de su resultado efectivo. A pesar de sus intenciones Esquerra no marcaba los tiempos y eso bloqueó sus iniciativas. La oposición del PSUC dejó los decretos sobre la mesa: Tarradellas no los retiraría, pero tampoco se discutirían. Por otra parte el 25 de julio se inició la batalla del Ebro y al calor de su resultado inicial Negrín apretó las tuercas internas.

El resultado fue la crisis de gobierno de agosto y su extraño desarrollo, que reforzó la posición de Negrín y dejó a Esquerra fuera de juego. Es conocido el planteamiento general de la crisis: Negrín presentó tres decretos en la sesión del gobierno del 11 de agosto (atribución absoluta de la industria de guerra y la persecución de la evasión de capitales al gobierno de la República y militarización de los tribunales especiales) que fueron rechazados inmediatamente por los representantes de Esquerra y del PNV, Aiguader e Irujo. Aquel mismo día Tarradellas comunicó a Azaña el desacuerdo de su partido y al siguiente los dos ministros dimitieron, abriendo la crisis de gobierno. De todas maneras hay algunos interrogantes sobre el origen de la crisis. En primer lugar quiero señalar que desde mediados de junio, después del cierre de la frontera francesa, la dirección de Esquerra Republicana se estaba planteando la cuestión del gobierno de la República; en esa línea Andreu Abelló, en la sesión del Consejo Directivo del 17 de junio había criticado a Aiguader por falta de energía hasta llegara proponer su sustitución si no era capaz de hacer valer las posiciones de Esquerra en el Consejo de Ministros. Entre los republicanos catalanes había ya una cierta predisposición a la crisis. Cuando tras la resolución de la crisis vuelva a reunirse el 18 de agosto el Consejo Directivo, en pleno, ampliado a exministros y exconsejeros de la Generalitat, en el análisis que Pi i Sunyer hizo del proceso señaló que se había cumplido “con dignidad y corrección” el mandato que tenía la dirección de plantear la cuestión

del gobierno en el momento oportuno y que si no se habían conseguido los objetivos no había sido por culpa de Esquerra que “ha actuado como un ejército que avanza y que como consecuencia de un fallo ha quedado con el flanco descubierto”. Palabras que sugieren que había algo más que predisposición, que había decisión de ir a la crisis en el momento oportuno. Luego, en sus memorias Pi Sunyer explicaría las cosas de modo muy diferente, atribuyendo todo a una maquinación provocadora de Negrín. El desenlace de la crisis no fue el esperado y lo habitual es presentar a Negrín en su faceta más ciclotímica e imprevisible primero amagando con abandonar y finalmente resolviendo de manera repentina, con una patada a seguir – perdón por el simil deportivo –, que dejó fuera de juego a Esquerra y PNV. Hay otra lectura posible, sobre todo después del regreso de Companys, en aquel momento fuera de Cataluña, el 14 de agosto y de su entrevista con Azaña, que disparó los rumores sobre cambio de gobierno. En ese momento Negrín decidió tomar la iniciativa y presentarse por su propia cuenta a la reunión que mantenía Companys con el grupo dirigente de Esquerra Republicano, en la que respondió al envite de Esquerra – dimisión de Aiguader y puesta en crisis del gobierno, en plena batalla del Ebro – con otro envite: si planteas la cuestión del gobierno asume tú la responsabilidad del gobierno. Sean cuales fueran las formas en que hizo la propuesta, Companys no pudo dejar de sentir que se le estaba midiendo su voluntad y su capacidad de cambio político. Desde el momento en que Companys no estaba en condiciones de sustituir a Negrín, por lo que le pidió a éste que siguiera, quedó a expensas de la decisión que Negrín tomara. Ahí estaba uno de los fallos que dejaba los flancos abiertos. La entrevista de la mañana siguiente entre Tarradellas y Sbert con Negrín tuvo también un autoinvitado, Comorera; autoinvitado para los representantes de Esquerra, que no lo esperaban, pero ¿tampoco lo esperaba Negrín? Cabe la posibilidad, como hipótesis, de que a Negrín, que en la noche del 15 de julio había obtenido de Esquerra la confesión de que no pugnaría para desplazarle de la presidencia del Consejo de Ministros, le conviniera que en la reunión de la mañana siguiente, en la que Tarradellas y Sbert habrían de concretar más sus desideratas, hubiera un tercer elemento, el PSUC. Que por un lado actuara como testigo de la posición que le había manifestado Esquerra la noche anterior – no querían una crisis general sino una crisis parcial que, desde luego, no dejaría de tener influencia en el curso político posterior - y por otro situara la discusión en un nivel menos concreto y más genérico sobre el estilo de las relaciones entre los dos gobiernos – de ahí la fogosidad con la que, según Pi i Sunyer, se empleó Comorera en la conversación, que tenía que ser a dos y se convirtió a tres; no creo que Comorera

discutiera con Negrín sobre el control de las industrias de guerra por parte del gobierno de la República, ni sobre la habilitación de un juzgado especial para la evasión de capitales . Por tanto el contenido de la reunión admitía lecturas diversas y había sido interferida por la presencia de Comorera; lo más claro era el apoyo que todos daban a Negrín para que continuara. No ha de extrañar entonces que, tras ella, Negrín pasara a resolver la crisis pensando que la podía manejar con una mayor libertad que antes de la noche del 15. Y decidió resolverla manteniendo la presencia de representantes catalanes y vascos, pero dejando fuera a las fuerzas dimisionarias, fundamentalmente a Esquerra que desde la noche del 15 había ido rebajando el nivel de su desafío en la misma proporción en que Negrín le había instado a llevarlo hasta sus límites. Se le presentó entonces un nuevo escollo cuando al consultar con Izquierda Republicana este partido dio por descontado que el planteamiento de la crisis era general y que su resolución no correspondía a Negrín, sino a Azaña. Así, por tanto, todo quedaba pendiente de cuál pudiera ser la posición del Presidente de la República. El comentario de Zugazagoitia es esclarecedor: “Fueron muchos los que esperaban un Gobierno constituido por las figuras destacadas del régimen republicano, encargado de orientar la política hacia la consecución de la paz. Quienes trabajaron para ese Gobierno – de ello se acusó, pásese me la palabra, a los republicanos – olvidaron que la causa original de las dimisiones no consentía a Azaña abrir la crisis total sin reforzar, automáticamente, la plataforma nacionalista de la Generalidad de Cataluña, contra lo que el jefe del Estado tenía tantos motivos de disgusto como el presidente del Consejo”¹⁹. Ahí estaba el otro, y principal, fallo de Esquerra, quizás, como sostuvo Pi i Sunyer había escogido el momento oportuno, pero no habían sido oportunos los motivos esgrimidos para la crisis. Había ahí un campo suficiente de entendimiento entre Azaña y Negrín para que el proceso de crisis general quedara abortado. Azaña era el talón de Aquiles de la iniciativa política de Esquerra. A partir de ese momento ERC entró en una fase de desconcierto y ensimismamiento. En el Consejo Directivo del 18 de agosto se impuso la tesis de “cerrarse en casa, en una política de dignidad catalana”, mientras la segunda parte de la reunión se dedicó a descargar toda la frustración de Esquerra contra el PSUC acordando de manera unánime su incompatibilidad con dicho partido. La consecuencia lógica de esa posición unánime era volver a poner sobre la mesa la crisis ahora del Gobierno de la Generalitat, por lo que Tarradellas planteó a la dirección de Esquerra manifestar a Companys esa incompatibilidad pero no de manera cerrada para dejarle suficiente margen de maniobra. Entre finales de agosto y primeros de septiembre la cuestión del

cambio de gobierno en la Generalitat volvió a estar sobre la mesa, en términos semejantes a los del mes de marzo. De nuevo se intentó que el Comité catalán del Frente Popular fuera el instrumento formal de la propuesta a Lluís Companys, aprovechando la aprobación de un manifiesto con motivo del 11 de septiembre, pero, como en la ocasión anterior, la oposición del PSUC lo impidió²⁰. El asunto solo sirvió en definitiva para romper la dinámica de aparente acuerdo que el Frente popular de Cataluña había mantenido hasta entonces. Por otra parte Esquerra Republicana y Acció Catalana Republicana no coincidieron en la caracterización y composición que había de tener el nuevo gobierno. En tanto que Esquerra resucitaba la fórmula de diciembre de 1936, proponiendo a Companys un gabinete con 3 representantes de Esquerra, 2 de CNT, 2 del PSUC, 1 de ACR y 1 de Unió de Rabassaires, Acció Catalana prefería un gobierno “de base republicana” con presencia limitada al máximo de representantes “obreros y sindicales”. Sea como fuere, tampoco este planteamiento de crisis prosperó y la dinámica del gobierno catalán quedó aún más paralizada que antes del verano, agravada además por el deterioro de la situación financiera de la administración autonómica, que pasó a ser el siguiente caballo de batalla entre Esquerra y el Gobierno catalán, de un lado, y el Gobierno de la República, de otro. Y todo ello ocurría en medio de la batalla del Ebro, una cuestión a la que la dirección de Esquerra no dedicó ninguna atención particular, al menos por lo que se reflejó en sus actas.

El inicio del contraataque de las tropas de Franco en el Ebro en los últimos días de octubre reactivó las maniobras políticas, todas estériles, sin más resultado que sumar desconcierto. El 10 de noviembre, Negrín sugirió a Togliatti prescindir de los partidos y constituir un Frente Nacional de cariz personalista y militarista para asegurar la cohesión de la política de resistencia. Sin éxito, como sabemos. Esquerra, con el concurso como siempre del PNV, argumentando la expectativa de la próxima reunión entre Churchill y Daladier el 23 de noviembre, presionó en la línea contraria, presentando al Secretariado de Partidos Republicanos una vez más una propuesta de cambio del gobierno republicano centrado en la reintegración de ambos partidos, en sustitución del PSUC y ANV, y aunque se manifestaba el apoyo a Negrín y los Trece Puntos, se reclamaba una modificación de la línea política del gobierno “que señalase en el Gobierno de la República una tendencia plenamente republicana y constitucional”²¹. Izquierda Republicana lo apoyó, pero no Unión Republicana, de modo que el intento quedó de nuevo en papel mojado. En esta ocasión las declaraciones de Joan Casanovas, en Francia también ante la perspectiva del

encuentro entre Churchill y Daladier, le hicieron un daño directo a Esquerra. En ellas Casanovas manifestaba que la guerra le había sido impuesta a Cataluña desde fuera y que, por tanto, había de ser rechazada como un objetivo propio; Casanovas defendía que Cataluña hiciera su propia reconciliación entre derecha e izquierda y se autodeterminara, con apoyo internacional, para ser entre los Pirineos y el Mediterráneo “un factor de equilibrio y orden”. La reacción de *La Vanguardia* del 16 de noviembre fue furibunda, amenazando a Casanovas, si regresaba, con el Tribunal de Altra Traición pero fue más allá: “si hay algunos que no comprendiendo el entronque fatal del destino catalán al destino de la hispanidad sirven al espíritu de capitulación, noble es advertirles que están más cerca del piquete de ejecución que del éxito. Sólo caben dos actitudes: o resistir hasta que poseamos los elementos que reduzcan su acción, o capitular. El Gobierno de Unión Nacional es el Gobierno ilustre de la resistencia. Si hay quien desee un Gobierno de la capitulación, que alce la mano. Éste es el problema y todo lo demás son fantasías y chácharas”. Esquerra Republicana se dio por aludida, el 17 por la mañana Companys se quejó a Azaña de la mención a los piquetes de ejecución²². Esquerra bajó la mano.

La sensación que dan los debates internos y las propuestas de Esquerra en esta fase final de la guerra es la de una resignación a la política de resistencia combinada con la aspiración a participar en la gestión de esa política de resistencia sin acertar a encontrar la vía para conseguirlo. No contribuyó a ello que, al propio tiempo, insistiera en el seno del Gobierno de la Generalitat en su batalla política frente al PSUC, del que el mismo 16 de noviembre rechazó una oferta de pacto para negociar conjuntamente con el gobierno republicano. Por el contrario volvió a insistir - una vez conseguido un mínimo acuerdo financiero con el gobierno republicano - en la presentación de los decretos que en junio ya había rechazado discutir el PSUC. Los movimientos republicanos del último mes de 1938 insisten en ese pulso político que parece extemporáneo en vísperas de la ofensiva final sobre Cataluña. Al tiempo que ERC descarta emprender una movilización popular para hacer frente a dicha ofensiva, propuesta por el PSUC en el Comité del Frente popular, Tarradellas se centró en la elaboración de los presupuestos de la Generalitat para 1939 y en hacer de la aprobación de los decretos (recuerdo: pago del cupón de la deuda, devolución de la propiedad urbana, liquidación de la Oficina Reguladora de los Salarios, a los que se añaden dos más: reintegración de los seguros sociales a la Consejería de Finanzas y nombramiento de un delegado de la Generalitat por veguería – la nueva división territorial que ha sustituido a las provincias -) la bandera que según él habría de poner de manifiesto la política

de “rectificación y normalización” que se precisaba para acompañar a la acción de las armas²³. La situación que se generó fue esperpéntica, la insistencia de Tarradellas en que el Gobierno de la Generalitat aprobara los decretos, chocando con la negativa del PSUC a discutirlos siquiera conducía a una ruptura final del gobierno de la Generalitat, que Companys evitó por considerarla inoportuna, cuando Tarragona y Reus estaban ya cayendo en poder del ejército de Franco. Hasta el punto que Companys se vio obligado a rendir cuentas a la dirección de Esquerra, el 14 de enero, añadiendo que de todas maneras se sometería al acuerdo del partido y del Parlamento, incluso en contra de su criterio, pero no admitiendo someterse él al debate, con el pretexto de que tenía que abandonar la reunión para atender otro compromiso. El incidente presupone que Companys había tenido que resistir la presión, que solo podía venir de Tarradellas, de precipitar en plena progresión de la ocupación militar de Cataluña la crisis del gobierno - ¿con qué sentido? -, pero su negativa resultó insuperable. Nadie, ni Tarradellas, estaba en condiciones de contrariar abiertamente a Companys. La reunión acabó en un mar de lamentos, Pi i Sunyer la recordará como una reunión patética en la que no se llegó a nada. Era el final, ya solo quedaba pensar en la evacuación y en el exilio.

¹ He escrito sobre esa “resurrección” acompañada de su entendimiento con los anarcosindicalista una primera aproximación en la revista *L’Avenç*, número 300, marzo 2005: “Tarradellas i la guerra civil. Una certa manera de fer política”

² Joan Pons Garlandí, *Un republicà enmig de faïstes*. Barcelona, 2008

³ J.L. Martín Ramos, “Aproximación a las patrullas de control” en *Josep Fontana. Història i projecte social* Barcelona, 2004. En agosto de 1936 el porcentaje de reparto fue : 46% para CNT, 26% ERC y republicanos, 21% UGT y 6% POUM; a finales de octubre el cupo republicano había subido, era el 32%, en tanto que la CNT pasaba al 43%, la UGT al 19% y se mantuvo el del POUM; tras la retirada de UGT de Patrullas de control, a finales de enero de 1937, los porcentajes quedaron de la siguiente manera: CNT, 53%, ERC y republicanos, 38%, POUM, 9%

⁴ Los datos proceden de la Tesis doctoral, no publicada, de José Antonio Pozo González, “El poder revolucionari a Catalunya durant els messos de juliol a octubre de 1936. Crisi i recomposició de l’Estat”, Universidad Autónoma de Barcelona

⁵ Copia de las actas de los acuerdos del Comité central del PSUC de octubre a noviembre, en el Archivo Montserrat Tarradellas Macià (Monasterio de Poblet)

⁶ Francesc Roca, “Els decrets de s’Agaró, o Pla Tarradellas, més de seixanta anys després” en *Tarradellas o la reivindicación de la memòria(1899-1988)*, Pagés editor, Lleida, 2003

⁷ En mi intervención en la Jornada de debate sobre los Hechos de Mayo (Barcelona, Museo de Historia de Cataluña, mayo 2007), pendiente de publicación y en el artículo “A vueltas con los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona” *Ayer*, nº 69, 2008(1)

⁸ No entro en esta ponencia a considerar las repercusiones en el gobierno de la República, bien conocidas

⁹ Véanse las memoria de Marià Rubió y Tudurí, *Barcelona 1936-1939*, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2002

¹⁰ He tratado la cuestión en mi artículo “La afiliación del PSUC durante la guerra civil (1936-1939). Volumen, distribución territorial y composición social” en REVISTA HMiC, revista digital del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, consultable en: <http://seneca.uab.es/hmic>

¹¹ Véase mi ponencia al Primer Congreso de Historia del PSUC, Barcelona, 2006, cuyas actas han de publicarse próximamente por la editorial El Viejo Topo

¹² Manuel Azaña, *Memorias políticas y de guerra*, pág 181-184

¹³ El pleno de junio de 1937 acordó admitir la reintegración a Esquerra de los miembros del Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra, formado por Lluhí Vallescá y Tarradellas después de su ruptura con Esquerra en 1933

¹⁴ Carta de Aguirre a Companys del 17 de noviembre de 1937, Copia del Fondo catalán del PNV en el Arxiu Nacional de Catalunya

¹⁵ Carles Pi i Sunyer, *la República y la guerra*

¹⁶ Actas del Consell Directiu de ERC, Arxhivo Montserrat Tarradellas Maciá (Poblet)

¹⁷ Ver nota 8

¹⁸ La información sobre esos contactos la proporcionan las actas de las sesiones del Consell Directiu de ERC

¹⁹ Julián Zugazagoitia, *Guerra y vicisitudes de los españoles*, Librería Española, París, 1968, vol. II pág 173

²⁰ Actas del comité catalán del Frente Popular del 5 7 de septiembre. Archivo Montserrat Tarradellas Maciá

²¹ Acta de la reunión del Consejo Directivo del 16 de noviembre, AMTM (Poblet)

²² Azaña, *Memoriak*, vol II, pág 407

²³ Acta del pleno del Consejo directivo del 30 de diciembre de 1938.